



22

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 31 de Octubre de 2019

Ref. Of. 046-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

JUAN FRANCISCO SANDOVAL

JEFE

FISCALÍA ESPECIAL COTRA LA IMPUNIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

Su Despacho



Licenciado Sandoval:

Por éste medio me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo de Presidencia No. 03-2019 de éste alto organismo así como los artículos 4 y 55 literal a) de la ley de régimen interno, con el fin de solicitarle que en cumplimiento la normativa citada, rinda ante esta comisión el siguiente informe:

- Informe señalando los nombres completos de los profesionales litigantes o personal profesional legal, peritos en diversas áreas así como personal investigativo que siendo extranjeros, hayan ejercido en el país por instrucción de -CICIG-; estando apersonados en los casos que conoció o sigue conociendo esa fiscalía a su cargo. Lo anterior especificando el cargo o área de profesión o expertise de cada persona.

Este informe deberá entregarse al despacho de Tercera Secretaría de este alto organismo en un plazo que no exceda los 3 días hábiles.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
DIPUTADO





FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Ministerio Público
Guatemala, C. A.

OFICIO FECI-1104-2019-JFSA

Guatemala, 05 de noviembre de 2019.

Diputado
JUAN RAMÓN LAU
Su despacho

Diputado Lau:

En forma respetuosa me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a su oficio de fecha 31 de octubre de 2019, identificado como "Ref.Of.046-2019/J.R.L.Q/ccau", mediante el cual requiere información sobre "(...) los nombres completos de los profesionales litigantes o personal profesional legal, peritos en diversas áreas así como personal investigativo que siendo extranjeros, hayan ejercido en el país por instrucción de -CICIG-; estando apersonados en los casos que conoció o sigue conociendo esa fiscalía a su cargo. Lo anterior especificando el cargo o área de profesión o expertise (sic) de cada persona.". Para dar respuesta a su petición, se informa:

1. La actividad de apersonamiento en las distintas causas en las que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se querelló, por medio de sus respectivos mandatarios y el correspondiente auxilio profesional, se realizó en los tribunales de justicia, por lo que el suscrito se ve imposibilitado en brindar dicha información.
2. En el caso de los peritos, los mismos no se apersonan en los casos, y en la ocasión de ser admitidos como órganos de prueba ante un órgano jurisdiccional, es éste el que se encarga de dar valor probatorio a su respectivo informe, dictamen y/o testimonio.

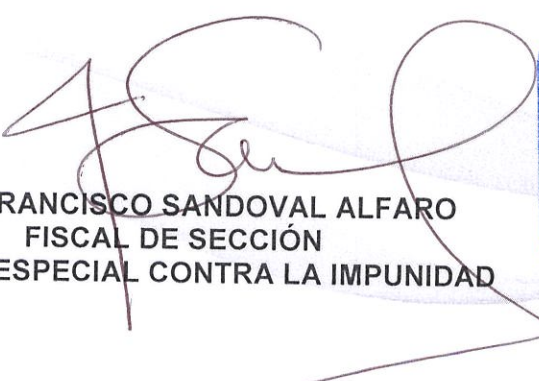
3. De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República, tienen acceso al proceso el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados (artículo 14 constitucional).
4. El artículo 30 de la Constitución Política de la República, que es fundamento de la petición que realiza, establece la publicidad de los actos administrativos.
5. Con el propósito de desarrollar y armonizar el texto constitucional, el Congreso de la República aprobó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la que no establece la información de los procesos judiciales, como información pública de oficio, por el contrario, la regula como información reservada.
6. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público impone que en cumplimiento de las funciones que se atribuyen al Ministerio Público, se debe actuar sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni de autoridad alguna.
7. Esa disposición ha sido desarrollada por la Corte de Constitucionalidad en el siguiente sentido: “ (...) el artículo 251 de la Constitución, que indica que el referido ente es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales **con funciones autónomas**, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes de la República, lo que supone, como se consideró en el fallo de esta Corte dictado el catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el expediente 662-94, que el régimen del Ministerio Público se rige por los principios de unidad, legalidad, jerarquía y autonomía funcional, último que implica que en el ejercicio de sus funciones, el mencionado ente no está subordinado a autoridad alguna. Conviene traer a cuenta, además, lo regulado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que indica: “El Ministerio Público, como institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este Código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al Jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta

ley concede a los tribunales de justicia.” Sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil quince, dictada en los expedientes acumulados 1309-2015 y 1389-2015.

8. El artículo 10 numeral 2) del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala reguló: *“El personal internacional disfrutará de los privilegios e inmunidades otorgados a los expertos en misiones de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En particular, disfrutarán de: (a) Inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación de su equipaje personal; (b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG”.*
9. El artículo VI sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de la que Guatemala forma parte desde 1947, dispone en relación a los peritos que formen parte de Misiones de las Naciones Unidas: *“(…) A los peritos (aparte de los funcionarios comprendidos en el Artículo 5) en el desempeño de misiones de las Naciones Unidas, se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas. En especial, gozarán de: (a) inmunidad contra arresto y detención y contra el embargo de su equipaje personal; (b) inmunidad contra toda acción judicial respecto a palabras habladas o escritas y a sus actos en el cumplimiento de su misión. Esta inmunidad contra toda acción judicial continuará aunque las personas interesadas hayan cesado ya de trabajar en misiones para las Naciones Unidas (…)”.*

10. Lo consignado en los numerales 8 y 9 debe ser respetado, por encontrarse en el marco de lo que establecen los artículos 46 y 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
11. En relación a las personas vinculadas a proceso penal, como sujeto procesal, - entre estos quienes comparecen como querellantes, testigos o peritos-, ameritan la protección debida (como la de sus datos), de la manera como lo regula la Ley de Protección a Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Justicia Penal.
12. La información que el suscrito proporciona, se fundamenta en la normativa legal que corresponde a mi función de servidor público, haciendo también acopio de las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, según las cuales: *"(...) Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. (...)".*
13. Pese a no encontrar sustento alguno el plazo conferido, se da respuesta a la petición en cumplimiento de la obligación que impone el artículo 28 de la Constitución Política de la República.

Sin otro particular, queda de usted,


JUAN FRANCISCO SANDOVAL ALFARO
FISCAL DE SECCIÓN
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD





*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



COMISION DE LA VERDAD
ACUERDO No.3-2019 de Presidencia
Organismo Legislativo

Guatemala, 18 de noviembre de 2019

Ref. Of. 052-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

JUAN FRANCISCO SANDOVAL

JEFE

FISCALÍA ESPECIAL COTRA LA IMPUNIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

Su Despacho

Licenciado Sandoval:

Por éste medio me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo de Presidencia No. 03-2019 de éste alto organismo así como los artículos 4 y 55 literal a) de la ley de régimen interno, con el fin de invitarle a que se presente a ésta comisión el día miércoles 20 de noviembre a las 11:00 hrs. en el Salón del Pueblo. Lo anterior con el fin de que coopere con unas consultas que le realizará ésta comisión en audiencia pública.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
DIPUTADO



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva



FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Ministerio Público
Guatemala, C. A.

OFICIO FECI-1150-2019-JFSA

Guatemala, 19 de noviembre de 2019.

Diputado
JUAN RAMÓN LAU
Su despacho

Diputado Lau:



En forma respetuosa me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a su oficio de fecha 18 de noviembre de 2019, identificado como "Ref.Of.052-2019/J.R.L.Q/ccau", que indica: "(...) con el fin de invitarle a que se presente a ésta comisión el día miércoles 20 de noviembre a las 11:00 horas en el Salón del Pueblo. Lo anterior con el fin de que coopere con unas consultas que le realizará ésta comisión en audiencia pública".

1. Agradezco por la invitación girada, sin embargo en el horario en que he sido convocado para comparecer al Congreso de la República me encontraré ejerciendo funciones en las oficinas del Ministerio Público, por lo que tengo indisponibilidad temporal para atender la misma.
2. No obstante ser una invitación, la misma está fundamentada en un cuerpo legal que perdió vigencia el 21 de diciembre de 1994 (Ley Orgánica y del Régimen Interior del Organismo Legislativo), cuando entró en vigor el Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
3. El artículo 32 de la Constitución Política de la República establece que: "(...) No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la



diligencia.". En la invitación girada –que no es denominada citación-, no se especifica expresamente las consultas que serían realizadas en forma pública, por lo que en ese sentido tampoco sería atendible la invitación.

Sin otro particular, queda de usted,


JUAN FRANCISCO SANDOVAL ALFARO
FISCAL DE SECCIÓN
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD





Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 25 de noviembre de 2019

Ref. Of. 060-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

JUAN FRANCISCO SANDOVAL

JEFE

FISCALÍA ESPECIAL COTRA LA IMPUNIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

Su Despacho



Licenciado Sandoval:

Por éste medio me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo de Presidencia No. 03-2019 de éste alto organismo así como los artículo 4 de la ley del Organismo Legislativo, con el fin de invitarle a que se presente a ésta comisión el día miércoles 27 de noviembre a las 11:00 hrs. en el Salón del Pueblo. Lo anterior para que coopere con el ejercicio que realiza esta comisión analizando lo relacionado al desempeño de la -CICIG- en el país.

Deferentemente,


JUAN RAMON LAU QUAN
DIPUTADO

Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazábal, Tercera Secretaría de Junta Directiva



FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Ministerio Público
Guatemala, C. A.

OFICIO FECI-1181-2019-JFSA

Guatemala, 26 de noviembre de 2019.

Diputado
JUAN RAMÓN LAU
Su despacho

Diputado Lau:

En forma respetuosa me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a su oficio de fecha 25 de noviembre de 2019, identificado como "Ref.Of.060-2019/J.R.L.Q/ccau", que indica: "(...) con el fin de invitarle a que se presente a ésta comisión el día miércoles 27 de noviembre a las 11:00 hrs. en el Salón del Pueblo. Lo anterior para que coopere en el ejercicio que realiza esta comisión analizando lo relacionado al desempeño de la CICIG en el país".

1. Agradezco por la invitación girada, la que no puedo atender por temas de agenda y actividades en el ejercicio de mis funciones.
2. Reitero los conceptos vertidos en oficio FECI-1150-2019-JFSA, cuando fui invitado a comparecer el 19 de noviembre pasado. En la convocatoria, nuevamente se incumplió con el artículo 32 de la Constitución Política de la República: "(...) No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia."
3. Fundo además mi respuesta, en el análisis jurídico de fecha 3 de octubre de 2019, efectuado por la Secretaría de Política Criminal, Fiscalía de Asunto Constitucionales y Departamento Jurídico del Ministerio Público, que concluy



"(...) El Organismo Legislativo tiene facultad para citar a empleados y funcionarios públicos a efecto de que rindan informe en cuanto al ámbito de su competencia. No obstante, el Ministerio Público, por medio de sus fiscales, no se encuentra obligado a asistir, en tanto se trate de casos concretos de investigación y persecución penal. Únicamente estarían obligados los funcionarios y empleados del Ministerio Público que tengan la competencia específicamente en materias de carácter presupuestario y administrativo". - Resaltado propio en el documento que adjunto en copia simple--

Sin otro particular, queda de usted,


JUAN FRANCISCO SANDOVAL ALFARO
FISCAL DE SECCIÓN
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD



Guatemala, 3 de octubre de 2019

Doctora

María Consuelo Porras Argueta

Fiscal General de la República y

Jefe del Ministerio Público

Su despacho

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir el análisis jurídico realizado en conjunto por el Departamento Jurídico, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, y la Secretaría de Política Criminal, en relación a la citación realizada por el Congreso de la República de Guatemala, para que asista a la Junta de Jefes de Bloque para rendir determinada información.

1) Disposiciones normativas analizadas

- a) Constitución Política de la República
- b) Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República
- c) Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República
- d) Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República

2) Análisis Jurídico:

De conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público es la institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, encargada de "velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país." Asimismo, dispone la norma constitucional: "El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública..."

Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula que es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además, vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece.

El artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala en lo conducente regula:

"(...) Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario."

La norma constitucional contiene una disposición imperativa en la que incluye a todos los funcionarios y empleados públicos dentro de la obligación de acudir a informar al Congreso, a las comisiones y a los bloques legislativos que lo integran.



Respecto de la interpretación de la norma constitucional citada, la Corte de Constitucionalidad señaló en Opinión Consultiva de fecha 1 de agosto de 2012, expediente 2217-2012:

"[...] De esta disposición imperativa general, únicamente se deben exceptuar quienes de conformidad con la propia Carta Magna tienen un tratamiento diferente, pues el texto constitucional debe ser interpretado de forma armónica de tal manera que no exista contradicción alguna entre sus normas. Entre estos casos, se encuentran los funcionarios que integran el Organismo Judicial quienes por virtud del artículo 203 de la Constitución Política gozan de independencia y tal norma primaria establece taxativamente que '(...) Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.' Este precepto hace inaplicable la norma general plasmada en el artículo 168 de la Constitución Política para el caso de los funcionarios judiciales, por lo que éstos no pueden ser citados al Congreso de la República a dar informes sobre el ejercicio de su función judicial pues ésta no está sometida al control político que ejerce el Congreso de la República y sus órganos integrantes. [...]"

Fuera del marco de excepción que establece la propia Constitución Política, todos los que ostentan la calidad de funcionarios y empleados públicos están sujetos al control político parlamentario, y en consecuencia están obligados a atender las citaciones que les formule el Congreso de la República, las comisiones o los bloques legislativos, y asistir a las audiencias fijadas previamente.(...)"

Ahora bien, un punto de discusión en esta materia lo constituye la posibilidad de que la citación se dirija a los fiscales del Ministerio Público respecto de investigaciones o procesos penales en curso.

En efecto, en materias de dirección de la investigación criminal y ejercicio de la persecución penal, la autonomía e independencia que el artículo 251 constitucional reconoce al Ministerio Público, veda la posibilidad de que cualquier otra autoridad interfiera de cualquier modo en las funciones propias del titular de la acción penal, pues de otro modo, las garantías de no interferencia y no subordinación quedarían vacías de contenido, afectando seriamente la objetividad con que esta institución debe actuar, en procura siempre de la realización de la justicia y del estricto cumplimiento de las leyes del país.

De esa cuenta, la autonomía e independencia que como garantías institucionales asisten al Ministerio Público impiden que cualquier autoridad, incluidos los diputados al Congreso de la República y sus distintas comisiones, requieran información o citen a los Fiscales encargados de la dirección de la investigación y el ejercicio de la persecución penal respecto de casos concretos, se encuentren o no judicializados, dado que dicho requerimiento de información o citación supondrían, para el actuar fiscal, una clara interferencia o injerencia no autorizadas por la Constitución.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia"¹, se ha pronunciado en cuanto a la independencia del Ministerio Público, habiendo señalado:

"36. Al respecto, el derecho internacional se ha referido a la importancia de que las investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del delito, sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito. La Corte Interamericana ha destacado la importancia de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos, además de inmediatas y exhaustivas, sean independientes e imparciales y la Relatoría de la ONU ha resaltado la importancia de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial.

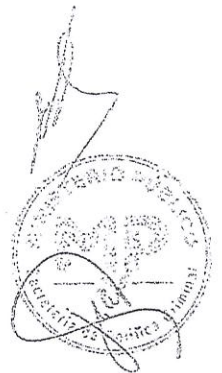
37. La Comisión considera que la relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso en las investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo de la investigación así como las implicaciones que tenga en el debido proceso. Es por ello que en el derecho internacional existen algunos criterios generales que permiten identificar la independencia institucional de la cual deben gozar las fiscalías públicas para garantizar que realicen de manera efectiva, y compatible con los estándares de derechos humanos su respectivo rol en el acceso a la justicia y garantía del debido proceso. (...)

41. Por otro lado, en lo que respecta a la relación de la Fiscalía respecto del poder legislativo, la Comisión nota que la Declaración de Burdeos indica de manera específica que el Parlamento no debe "intentar influenciar indebidamente las decisiones del ministerio público relativas a un asunto concreto, para determinar el modo de actuar en un determinado caso, u obligar al ministerio público a modificar su decisión (...)

77. La Comisión es de la opinión de que, atendiendo a los riesgos que conlleva a una investigación independiente, los Estados deben garantizar que las Fiscalías no se encuentren subordinadas a los órganos parlamentarios. Como se desarrollará en un apartado posterior, dicha subordinación no debe reflejarse inclusive en cualquier tipo de condicionamiento por parte del parlamento relacionado con la asignación de su presupuesto. Asimismo en cuanto a los marcos normativos que establecen la rendición de cuentas del o la Fiscal General ante el parlamento, la Comisión de Venecia ha recomendado que los Estados descarten la posibilidad de que el Fiscal General rinda cuentas al Parlamento en los casos individuales en que se emprendan o no acciones judiciales a fin de evitar un menoscabo en la investigación independiente debido a que los fiscales tomen decisiones institucionales sólo con el objetivo de gozar de popularidad en el Parlamento." (Resaltados son propios)

Por tal motivo, los fiscales no pueden ser citados por ninguna autoridad a efecto de informar respecto de investigaciones o procesos en trámite, pues ello pone en riesgo la autonomía que la Constitución garantiza al Ministerio Público.


¹ <https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/odh/Operadores-de-justicia-2013.pdf>




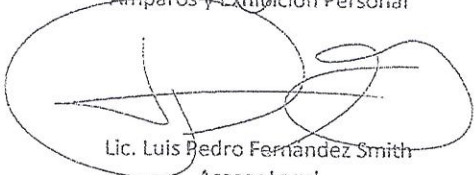
3) Conclusiones

El Organismo Legislativo tiene facultad para citar a empleados y funcionarios públicos a efecto de que rindan informe en cuanto al ámbito de su competencia.


No obstante, el Ministerio Público, por medio de sus fiscales, no se encuentra obligado a asistir, en tanto se trate de casos concretos de investigación y persecución penal. Únicamente estarían obligados los funcionarios y empleados del Ministerio Público que tengan la competencia específicamente en materias de carácter presupuestario y administrativo.

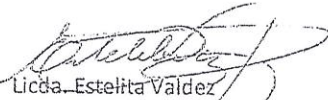

Lic. Mario René Paz
Auxiliar Fiscal
Fiscalía de Asuntos Constitucionales,
Amparos y Exhibición Personal



Lic. Marian Duarte
Asesor Legal
Departamento Jurídico


Lic. Luis Pedro Fernández Smith
Asesor Legal
Secretaría de Política Criminal

Vo.Bo.


Licda. Carla Valeriana Rojas
Fiscal de Sección
Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo
y Exhibición Personal


Licda. Estelita Valdez
Jefa de Departamento
Departamento Jurídico


Dr. Julio César Cordon Aguilar
Secretario
Secretaría de Política Criminal

